



EL CONFLICTO NACIONALISTA CATALÁN. UNA SOCIEDAD PLURAL ROTA POR CODICIAS Y AGRAVIOS

José Ángel Ruiz Jiménez*
Universidad de Granada
j.angel@ugr.es

RESUMEN: En este artículo ofrece una descripción y un análisis de la crisis abierta por el movimiento independentista en Cataluña desde 2012 hasta la actualidad. Las principales tesis del texto son que el nacionalismo catalán ha ido creciendo casi inadvertidamente desde la década de los 90 del siglo XX, hasta que tanto su apoyo entre la ciudadanía como la estructura de oportunidad política han sido propicias para plantear un desafío al estado Español. Las consecuencias a corto plazo han sido el fracaso de la tentativa independentista y el empobrecimiento de Cataluña por la fuga de empresas y descenso del turismo. Las consecuencias a largo plazo son que la sociedad catalana, hasta ahora orgullosa de su identidad plural y sus valores cívicos y democráticos, ha descendido hasta una fractura en dos bloques enfrentados que puede tener consecuencias imprevisibles.

PALABRAS CLAVE: Cataluña, nacionalismo, sociedad civil, fractura social.

THE CATALAN NATIONAL CONFLICT. A PLURAL SOCIETY BROKEN BY GREED AND COMPLAINT

ABSTRACT: This article offers a description and an analysis of the crisis caused by the Catalanian independentist movement from 2012 until the present day. The paper's main thesis is that Catalan nationalism has been stealthily expanding from the 1990s of the 20th century. That tendency has lasted until nationalism reached enough support among the population and the political opportunity structure was propitious for the nationalist to confront the Spanish central State. The short term consequences are the failure of the independentist movement and the impoverishment of Catalonia due to the migration of corporations and the decrease of the tourism business. The long term consequences are that Catalan society, once proud of its plural, civilised and democratic nature, has descended into a social cleavage of unpredictable repercussions.

* Profesor titular en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada. Doctor Europeo en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada (2005). Master Derechos Humanos en el Mundo Contemporáneo por la Universidad Internacional de Andalucía (2003). Diploma de Estudios Avanzados en Paz y Conflictos por la Universidad de Granada (2002). European Master in Human Rights and Democratization (EMA) por las Universidades de Padua y Essex (2000). Licenciatura en Geografía e Historia por la Universidad de Granada (1997)

KEY WORDS: Catalonia, nationalism, civil society, social cleavages.

INTRODUCCIÓN: LOS ORÍGENES HISTÓRICOS DE CATALUÑA

Las primeras referencias de una región catalana con entidad política se remontan a principios del siglo X, cuando tras la invasión musulmana de la Península Ibérica, el Reino Franco creó allí un estado tapón al que denominó Marca Hispánica. Estos territorios, que pasan a denominarse Principado de Cataluña, rompen con la monarquía carolingia a finales del siglo X, siendo el siglo XI un período de transición en el que aparece la lengua catalana, variante romance del latín y que termina con el matrimonio de Ramón Berenguer IV y Petronila de Aragón, de modo que lo que hoy es Cataluña se integra en el reino de Aragón. Luego, otro matrimonio, entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, lo harán formar parte desde el siglo XV del Estado español que con mínimas variantes territoriales y se soberanía ha llegado hasta nuestros días.

En 1640 hubo un episodio de rebeldía fiscal de Cataluña contra Felipe IV y su poderoso valido, el Conde-Duque de Olivares. Éste pretendía equiparar la contribución fiscal de todos los territorios del reino, pues la hacienda estaba organizada de un modo en que las cargas fiscales eran mucho mayores en Castilla que en Cataluña. Tras una revuelta conocida como “Corpus desangre”, Cataluña buscaría protección integrándose en Francia. No obstante, en tan solo once años de negativa experiencia los catalanes prefirieron reintegrarse a la Corona española, lo que se llevó a cabo de forma fácil y rápida en 1652. (ELLIOT, 1982 ; TORRES, 2006)

El testamento del último rey de la monarquía Austria-Habsburgo, Carlos II, quien murió sin descendencia, convirtió en heredero legítimo al francés Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV. Sin embargo, Cataluña le declaró su fidelidad en 1700, mientras el nuevo monarca juró los fueros de las cortes locales en Barcelona en 1702, e incluso se casó en el Monasterio de Villabeltrán, en Gerona, demostrando un serio compromiso e identificación con sus nuevos súbditos catalanes. Sin embargo, en 1704, la burguesía catalana dio un viraje al considerar que le sería más útil vincularse al candidato austriaco para evitar la competencia de los productos franceses. Tras su victoria, y siguiendo el modelo francés del que provenía, así como por motivos de

eficacia administrativa, Felipe V impuso los llamados Decretos de Nueva Planta, dando una mayor uniformización jurídica y administrativa a su reino.

Por ello, no tiene sentido plantear aquel conflicto como una guerra entre Cataluña y el resto de España, simplificación tan inexacta como interesada. Se trató de una guerra en la que se implicaron las potencias continentales, en la que ambos candidatos eran extranjeros, y en la que la principal beneficiada sería Inglaterra. En cuanto a Cataluña, no todos los castellanos eran anjuístas ni todos los catalanes antiborbónicos (ALBAREDA SALVADÓ, 2010).

Y es que una de las narrativas más poderosas del independentismo, es Cataluña era una especie de Arcadia libre y feliz, laxamente asociada a España, relación que se vio violentamente interrumpida por una invasión española encabezada por el rey Felipe V, quien tras sitiar Barcelona, que caería el 11 de septiembre de 1714, le arrebató sus tradicionales instituciones de autogobierno, imponiendo una centralización represora de los particularismos catalanes elegido como “fiesta nacional”.

Otro momento clave en la historia local fue la Guerra de Independencia (1808-14) en la que se combatió la invasión napoleónica. Cataluña dio entonces particulares muestras de su identificación con la causa nacional, con episodios tan destacados como el sitio de Gerona o la batalla del Tambor del Bruch (García Cárcel, 2007). La narrativa independentista catalana, en un curioso ejercicio de neolingua, ha tratado de popularizar el que se la denomine *Guerra del francés*, pues el término independencia parece reservado a Cataluña respecto a España.

La segunda mitad XIX trajo consigo la diferencia entre un modelo económico catalán industrial, con nuevas clases obreras y burguesas, frente al también capitalista modelo castellano-andaluz, más comercial, banquero, especulativo, y cercano al Estado como cliente y fuente de empleo, en un divergencia similar a la que se dio entonces en Gran Bretaña y Francia entre agraristas e industriales.

La crisis 98, en la que se entendió que España se había convertido en una potencia de segunda fila, junto con la llegadas de los nacionalismos a Europa, crea el primer catalanismo político, con el partido Lliga Regionalista y con figuras como de Prat de la Riba y Cambó. Su proyecto, lejos de ser independentista, planteaba que Cataluña fuera uno de los motores de otro tipo de España y proponía profundas reformas para reformar el Estado, la economía, la administración y la sociedad, en la línea de autores como Unamuno o de proyectos como la Institución Libre de Enseñanza

(DE RIQUER, 2013). A largo plazo, aquellas propuestas descentralizadoras no fueron bien comprendidas ni aceptadas, dándose las primeras tensiones entre una España que veía en el catalanismo una amenaza para la unidad nacional y una Cataluña que percibía que su relación con el resto del Estado no era de libertad, sino de imposición. Aparecería entonces el problemático encaje de Cataluña en España, la “cuestión catalana”, de la que se han venido alimentando, dos movimientos inversos y enfrentados: el nacionalismo periférico catalán y el nacionalismo centralista español. La represión del catalanismo por parte de la breve dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930) solo dio fuerza al nacionalismo. Así, mientras la Lliga jugó la carta centralista y monárquica de reformar España, el castigo al catalanismo supuso el auge de la rupturista ERC, que proponía un cambio de ideas, de régimen, de relación entre Cataluña y España. El Estatuto de Autonomía dispuesto para resolver el problema nacional español durante la Segunda República (1931-1939) fue abruptamente abortado por la dictadura franquista, para el que la unidad de España y de la nación española eran innegociables.

CATALUÑA EN EL ESTADO AUTONÓMICO DE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

Tras el centralismo uniformizador característico de la dictadura franquista, la democracia y la Constitución de 1978 se esforzaron por marcar diferencias y crear un nuevo marco en el que las diversas identidades históricas se viesan reconocidas. El Estado quedó dividido en las llamadas Comunidades Autónomas (CCAA), cada una con su propio parlamento, y en el caso de Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco y Valencia, un Estatuto de Autonomía propio por el que el Estado central les cedía competencias en ámbitos como salud, educación, policía o la cesión de algunos impuestos, siendo la cantidad de competencias distintas en cada caso. También era flexible respecto a realzar nuevos trasvases de competencias hacia las CCAA, pero nunca al revés. Entre 1978 y 2014 el Estado traspasó 1.994 competencias a las comunidades. La más beneficiada, con 189 funciones y servicios, ha sido Cataluña, seguida de Andalucía.

Los gobiernos autonómicos fueron conformando nuevas élites a tener en cuenta para la gobernabilidad del Estado, conociéndose a sus líderes popularmente como *barones*, un título nobiliario. Estas élites fueron aperciéndose de que el nuevo

marco autonómico constitucional les ofrecía atractivas oportunidades para prosperar, consolidándose así nuevos grupos de poder al abrigo de los presupuestos y poderes autonómicos. Este es el caso de Andalucía, la Comunidad de mayor tamaño y población, en la que desde las primeras elecciones autonómicas en 1982 sólo ha gobernado el Partido Socialista (PSOE), estableciendo redes clientelares y un control de la administración no decisivos –pues hay más factores- pero sí de gran ayuda para perpetuarse en el poder. No obstante, Andalucía, como Valencia, nunca han contado con partidos políticos de peso que plantearan un proyecto independentista.

Más interesante resulta el caso de País Vasco y Cataluña. Ambos poseen una lengua propia -que convive con el castellano- y una trayectoria nacionalista y autonomista que arrancó a finales del siglo XIX, viéndose bruscamente truncada por la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura (1939-78), lo que les confiere un carácter especial. Junto a los partidos con representación en todo el país, tales como el socialista PSOE o el conservador Partido Popular (PP), concurrían a las elecciones generales partidos nacionalistas cuyos programas buscaban beneficiar solo a la población de su comunidad autónoma. Estos iban desde partidos con un discurso estudiadamente ambiguo entre el respeto a la Constitución y la independencia de sus regiones, caso de PNV (Partido Nacionalista Vasco) y el catalán CiU (Convergencia y Unió), hasta formaciones abiertamente independentistas y republicanas como ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) y la izquierda abertzale vasca, también abiertamente independentista. Todos estos partidos concurrían libremente a las elecciones, garantizándose un espacio político plural dentro del respeto a las leyes.

Los Acuerdos Autonómicos de 1981 fijaron como objetivo generalizar el proceso de descentralización «para lograr en un plazo razonable una distribución homogénea del poder». Para 1983, todas las autonomías habían adoptado sus propios estatutos. Entre 1981 y 1984, la administración estatal transfirió 486 funciones y servicios a las regiones, según datos de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. El Estado de las autonomías era una realidad.

Entre 1984 y 1992 tuvo lugar la segunda fase del desarrollo territorial, en la que las nuevas autonomías se armaron con los organismos institucionales previstos para las comunidades «especiales»: presidentes, gobiernos, parlamentos y la progresiva aparición de órganos auxiliares que reprodujeron a escala regional los órganos de poder

del Estado. También se crearon en el ámbito regional defensores del pueblo y consejos consultivos y económicos.

En este contexto, la formación conservadora CiU gobernó Cataluña ininterrumpidamente desde 1980 hasta 2003, mientras el PNV lo hizo entre 1980 y 2009, recuperando el poder en 2012. En ese período, se fue consolidando un curioso mecanismo. Tanto PNV como CiU se caracterizaron por colaborar a la gobernabilidad del Estado español, prestando sus escaños en el parlamento a gobiernos sin mayoría absoluta, permitiéndoles así aprobar presupuestos y realizar sus funciones ejecutivas con normalidad. En el caso catalán, CiU apoyó a Adolfo Suárez durante la Transición, luego al PSOE de Felipe González en 1993 y más tarde al PP de José María Aznar (Pacto del Majestic) en 1996. Naturalmente, estos apoyos no eran gratuitos, de modo que tanto País Vasco como particularmente Cataluña se beneficiaron de trasferencias de poder, privilegios e inversiones especiales a cambio de sus votos. Incluso si tomamos como referencia a José María Aznar, presidente del gobierno español entre 1996 y 2004, ferviente adalid de la unidad y fortaleza de España, veremos la cantidad de concesiones realizadas a cambio de disfrutar del poder en Madrid. Aznar propició un nuevo sistema de financiación para las CCAA que incluyó la cesión del 33% de la recaudación del IRPF (antes era del 15%), del 35% del IVA (desde el 0% anterior) y del 40% de los impuestos especiales. Durante su mandato, se realizaron importantes transferencias de competencias a Cataluña, entre las que destacan las de tráfico (hasta entonces en manos de la Guardia Civil), justicia, educación no universitaria, agricultura, cultura, farmacias, sanidad, empleo, puertos, medio ambiente, mediación de seguros y vivienda. Además, se eliminó la figura del gobernador civil, que fue sustituida por la de subdelegado del Gobierno, con menos competencias que el anterior.

También se pusieron en marcha o se reactivaron importantes inversiones en Cataluña, como las ampliaciones del puerto y del aeropuerto de Barcelona, y la construcción de la línea del AVE Madrid-Barcelona, así como se concedieron canales adicionales de TDT a la Generalidad, antes que al resto de las CCAA. Tras la aprobación en Cataluña de la Ley de Política Lingüística de 1998, que discriminaba a los castellanohablantes -especialmente en el ámbito de la educación y del comercio-, Aznar evitó recurrirla ante el Tribunal Constitucional (TC) y maniobró para que el Defensor del Pueblo tampoco lo hiciera. Es más, permitió que se aprobara la Ley de Normalización Lingüística, que relegó al castellano de las escuelas a un tratamiento casi

de lengua extranjera e impidió que se recurriera al TC y que se aplicara la ley que obligaba a la enseñanza bilingüe. Además, no protegió el derecho de los padres a que sus hijos estudiaran en español (junto al catalán), y permitió que se siguiera aplicando el sistema de inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán, desoyendo la resolución al respecto del TC en 1994 y evitando que se recurriera. En definitiva, precisamente el *españolista* Aznar realizó el mayor número de traspaso de competencias a la Generalitat, hasta completar las 189 que hacen de Cataluña la comunidad con mayor autogobierno de toda España.

Por los mismos medios, los nacionalistas también arrancaron al sucesor de Aznar, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), un acuerdo que compensaba económicamente el déficit de Cataluña pero no el de otras comunidades, así como una garantía de inversiones del Estado en Cataluña. Además, el Gobierno reconoció la llamada “deuda histórica”, asumiendo la existencia de un déficit de inversiones estatales en Cataluña, acordando que este déficit se paliaría en siete años. Se trataba de una medida que quebraba claramente el principio de solidaridad entre las comunidades, pues tal compensación no se daba en ninguna otra región. Además, un acuerdo de Zapatero y el presidente catalán Artur Mas de blindaje de competencias a Cataluña la situó en una posición de privilegio respecto de las restantes CCAA. Aquello provocó una oleada de críticas por parte de comunidades como Murcia y Castilla-La Mancha, a las que se prohibió emitir deuda hasta que no regresaran a la senda de la consolidación fiscal (AGUIRRE DE CÁRCER, 2011). De este modo, las CCAA sin partidos nacionalistas quedaban en franca desventaja, pues tanto Cataluña como País Vasco, que ya eran dos de las regiones más ricas del país, vieron reforzada su privilegiada posición. Se entró entonces en un círculo vicioso en el que Cataluña y País Vasco exigían cada vez más competencias, y si se les negaban, respondían con un discurso victimista y de desafección al Estado, al que se acusaba de ineficaz y centralista. En caso de concederse las competencias exigidas, ambas se encontraban en una posición reforzada para continuar demandando más y más poder, mientras el estado central se iba debilitando en una lógica de confrontación que solo podía tener su último capítulo cuando ya no quedara nada que transferir, o sea, cuando se obtuviera la independencia. En el proceso, cualquier éxito se consideraba mérito propio, mientras los fracasos eran culpa de Madrid, de España, de lo insuficiente de la descentralización, del Gobierno central o incluso del parasitismo de los andaluces.

LA ESTRATEGIA DE RECATALANIZACIÓN Y LOS PLANES HEGEMONISTAS DE CIU

Cuando se votó la Constitución española de 1978 el pueblo catalán acudió a votar en una proporción mayor que en el resto de España -en concreto, un 67,70% de participación en Cataluña frente al 67,66% de la media nacional- y el sí arrasó con un 90,44% -frente al 87,79% de la media nacional. El problema catalán parecía resuelto con la nueva democracia, la descentralización y el Estado de Autonomía. El pueblo catalán aprobó en las urnas un marco político y jurídico en el que disfrutar a satisfacción su diversidad identitaria y lingüística. Considerando ese punto de partida, desde una fecha muy temprana, el gobierno nacionalista de CiU, bajo el liderazgo indiscutible de Jordi Puyol se esforzó por uniformizar gradualmente aquella sociedad plural. Uno de los primeros pasos, dados en 1990, fueron el conocido como *Programa 2000* o *La estrategia de la recatalanización*, documento de trabajo que el gobierno de Puyol hizo llegar tanto a todas las consejerías del gobierno catalán, así como a todas las altas esferas de CiU, siendo publicado íntegramente en el diario barcelonés *El Periódico* aquel mismo año. El texto contenía indicaciones tales como introducir un nuevo concepto de nación emergente dentro del marco europeo: Cataluña (Països Catalans); impulsar el sentimiento nacional catalán de los profesores, padres y estudiantes; incidir en las asociaciones de padres, aportando gente y dirigentes que tengan criterios nacionalistas; reorganizar el cuerpo de inspectores de forma y modo que vigilen el correcto cumplimiento de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza. Vigilar de cerca la elección de este personal; potenciar a personalidades de ideología nacionalista en los órganos rectores de las tres universidades catalanas; introducir a gente nacionalista de una elevada profesionalidad y una gran cualificación técnica entre los lugares claves de los medios comunicación; lograr que los medios de comunicación dependientes de la Generalitat sigan siendo unos transmisores eficaces del modelo nacional catalán y catalanizar las actividades deportivas y lúdicas. Entre los diversos objetivos de aquella política, uno a tener muy en cuenta era que potenciar el nacionalismo catalán era un modo de ampliar y asegurar el futuro de su base electoral y, por tanto, su continuidad en el poder frente a su principal rival de entonces, el

socialdemócrata de izquierda PSC, brazo catalán del PSOE, partido con arraigo en toda España.

La CiU de Puyol gobernó sin grandes sobresaltos, entre el *intercambio de favores* con el gobierno central descrito en el apartado anterior, entre 1980 y 2003. Fue entonces cuando el PSC obtuvo la mayoría de votos aunque no de diputados, gobernando el socialista Pasqual Maragall en coalición con los otros dos partidos de la izquierda catalana, ERC e Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) tras el conocido como Pacto del Tinell. Aquel gobierno tripartito se reeditaría entre 2006 y 2010, siendo el socialista José Montilla el nuevo *president*, si bien la figura más mediática y carismática era su vicepresidente, Josep Lluís Carod-Rovira, de ERC. Sus radicales ideas independentistas de izquierda contrastaban con la moderación y perfil bajo de Montilla. Así, Carod llegó a afirmar en 2008 que, para conseguir que una mayoría de ciudadanos se decidiera por la vía soberanista en Cataluña, era necesario que se hiciera incidencia en los beneficios económicos que la independencia reportaría más que en la existencia de una identidad lingüístico-cultural común, ya que según sus propias palabras: “Patriotas de lengua y cultura hay unos cuantos, pero de bolsillo lo somos todos”. (RODRÍGUEZ, 2008). En junio de 2011 y al calor del movimiento 15-M en Cataluña, Carod acusaría a los indignados catalanes de ser un movimiento “de pacotilla”, un “mero instrumento del nacionalismo español” y de no ser merecedores de credibilidad o respeto por el hecho de no estar a favor de la independencia de Cataluña y no ser nacionalistas catalanes. En un artículo en *Nació Digital* negó el carácter “catalán” de los miembros del 15-M en Cataluña y les invitó, tildándoles despectivamente de *españoles*, a marcharse de Cataluña para protestar.

Aquel gobierno se lanzó a conseguir un nuevo Estatuto de Autonomía que diese más poder a Cataluña respecto al gobierno central, y cuya propuesta fue aprobada por el Parlamento de Cataluña en 2006. La Comisión Constitucional recortó los aspectos que le parecieron inconstitucionales de aquella propuesta, siendo particularmente polémico el uso del término *nación* para designar a Cataluña. Aquello fue interpretado desde Cataluña como una afrenta, entendiendo que el Estado español humillaba la soberanía del Parlamento Catalán y del pueblo de Cataluña, demostrando así su centralismo y vocación de mantener sometida a Cataluña contra su voluntad. Contribuyeron al enfado catalán declaraciones como las del líder socialista Alfonso

Guerra, presidente de aquella Comisión Constitucional, quien se jactó irrespetuosamente en público de que se habían “cepillado” el Estatuto. Tres semanas más tarde, una manifestación recorrió Barcelona bajo el lema “Somos una nación. Nosotros decidimos” El 11 de Septiembre de 2012, en plena crisis económica, más de un millón de catalanes aprovecharon ese día de fiesta nacional para reivindicar la independencia, lo que se repetiría en los años sucesivos como muestra de su determinación.

Mientras tanto, en 2010, CiU logró recuperar el poder con 62 de los 135 escaños del *Parlament*. Ahora al mando de Artur Mas, CiU volvió decidida a recuperar su hegemonía; esta pasaba por recuperar los votos que habían ido a parar a ERC, aparente beneficiaria de la labor nacionalista de CiU entre 1980 y 2003. Hasta entonces, el grueso de CiU había potenciado abiertamente el catalanismo en perjuicio de la imagen y la identidad españolas, mientras se mostraban calculadamente ambiguos respecto a la cuestión independentista. Así, daba la impresión de que había estado fabricando independentistas que terminaban votando por otro partido. Con un programa más soberanista, Mas convocó elecciones anticipadas buscando la mayoría absoluta el 25 de noviembre de 2012, en lo que resultó ser una maniobra política muy contraproducente: CIU perdió 12 escaños y se vio obligado a pactar con ERC para conservar el poder, pasando de ser rivales ideológicos a extraños compañeros del soberanismo.

El nuevo gobierno de coalición pro-independentista de Artur Mas planteó un referéndum por la independencia que fue declarado ilegal por el TC. Aún así, desafiando al gobierno central y a los jueces, y aunque ya solo tuviera carácter simbólico, Mas decidió llevarlo a cabo el 9 de noviembre de 2014 ante la indiferencia de los catalanes no independentistas. Sólo votó el 37% de los censados, entre los que el Sí a la independencia llegó al 80%.

Una cuestión que han destacado numerosos analistas es que para aquel entonces, la cuestión independentista no era solo una estrategia electoral y de poder por parte de CiU, sino de protegerse de la acción de la justicia española, pues empezaron a descubrirse diversas tramas de corrupción en CiU que, a diferencia de algunas pasadas, como el caso Banca Catalana (Gonzalo Alconada, 2017), eran ya de tal alcance que amenazaban no solo a las élites del partido, sino a su propia existencia: caso Palau de la

música, caso 3%, caso ITV, cuentas bancarias millonarias, en paraísos fiscales de toda la familia Puyol y financiación ilegal del partido, entre otras. La sucesión de escándalos contemplaba cifras que iban entre los 1800 y los 3000 millones de Euros. Todas las sedes de CiU terminarían embargadas y el antes intocable y respetado líder Jordi Puyol tuvo que renunciar al sueldo y a la oficina que tenía asignados como expresidente, así como al título honorífico de presidente fundador de CDC y de CiU, así como al trato honorífico de *Molt Honorable Senyor* y a la medalla de oro de la Generalidad.

En 2015, el TC rechazó el nuevo estatuto de autonomía, que había sido aprobado por el Gobierno y Congreso de España, por el Parlament catalán y los ciudadanos en un referéndum, destacando de nuevo la polémica porque el preámbulo mencionaba a Cataluña como “nación”.

EL PROCESO SOBERANISTA

El gobierno nacionalista de CiU y ERC inicio una serie de acciones que fueron elevando el nivel de desafección a España. Se llevaron a cabo numerosas iniciativas para promocionar una imagen de Cataluña como sociedad moderna y democrática, a la vez que víctima agraviada por los abusos de España. Uno de los lemas más exitosos fue “España nos roba”, denunciando el parasitismo fiscal del resto del Estado. En 2014, el gobierno de Artur Mas llenó las fachadas de Cataluña de enormes carteles con el Slogan “Viure Lliure” (vive libre) con motivo del 300 aniversario de la guerra de sucesión de 1714, cuyo mensaje implícito era denunciar la opresión que había sufrido Cataluña dese entonces; ese mismo año, ; el gobierno catalán patrocinó un simposio al más alto nivel al que se tituló con un rotundo *Espanya contra Catalunya: una mirada històrica*; en 2015, la Generalidad publicó una lista de agravios de España a Cataluña. La antipatía catalana hacia España fue aumentando en un contexto de insistente búsqueda de un responsable externo para la incesante crisis económica por parte del Gobierno de la Generalitat. El aproximadamente 15% de independentistas de las primeras décadas de la democracia fue incrementando su número sobre todo por tres motivos: sentimientos de afrenta, razones económicas y frustración ante un Estado central que ignoraba la masiva petición de realizar un referéndum por la independencia. Respecto al último punto, el Gobierno conservador de Mariano Rajoy tenía pocos incentivos para satisfacer aquella demanda. Por una parte, su partido obtenía muy pocos votos en Cataluña y

prefería contentar a sus millones de votantes del resto del país que veían con recelo la posibilidad de romper la unidad nacional. Por otra parte, la Constitución no contemplaba esa posibilidad, así que podía escudarse en la ley para ignorarla. De hecho, la actitud de Rajoy llevó a que se le empezara a conocer con el apodo Don Tancredo, por su pasividad. Para muchos catalanes, el que el Gobierno simplemente ignorase las peticiones del gobierno de la Generalitat y de tantos manifestantes por el referéndum les confirmó lo que los mensajes institucionales catalanistas les habían venido anunciando: bajo su apariencia democrática, España era un Estado centralista que oprimía y no escuchaba a Cataluña.

El siguiente paso de Artur Mas fue convocar unas elecciones autonómicas en las que perseguía una amplia mayoría de los partidos independentistas en las urnas que legitimara la celebración del referéndum. Propuso la creación de una lista única formada por partidos políticos, sociedad civil y profesionales (expertos reconocidos), creada con el nombre de Junts pel Sí (JPS) siendo el candidato a la Presidencia Mas. Sin embargo, aquel frente unitario, que pretendía mostrar a España y al mundo el clamor del pueblo catalán por la independencia, ni siquiera obtuvo votos suficientes asegurar la continuidad de Mas al frente del gobierno. Éste necesitaba los votos de la CUP (partido independentista anticapitalista, por tanto fuera de JPS) para poder ser presidente, y este partido había manifestado ya desde la campaña que no invertiría a Mas, representante del liberalismo que aborrecía. Para evitar la repetición de elecciones, después de un acuerdo in extremis entre JPS y la CUP, se anunció que Mas sería sustituido como presidente de la Generalitat por Carles Puigdemont. Mientras Artur Mas, dentro de su ambigüedad, parecía considerar la opción independentista como táctica para obtener más autonomía del Estado central, Puigdemont era un independentista convencido que pronto dejó de escuchar los consejos de moderación de Mas.

El conflicto entró en una nueva fase de bloqueo, en la que el Gobierno central seguía afirmando no poder negociar con la Generalitat nada fuera del marco legal, lo que incluía un referéndum por la independencia, ante en la que el gobierno catalán planteó una estrategia unilateral que, si bien no era legal según las leyes españolas, sí era a sus ojos legítima e incluso legal si, al fin y al cabo, provenía de un gobierno autonómico democráticamente elegido en las urnas. El ejecutivo de Puigdemont aceleró los preparativos para la independencia, creando unas estructuras de Estado paralelas y un planteando un referéndum definitivo, tras el cual prometió la proclamación de la

República Catalana en caso de vitoria del “Sí”. Desconociendo la legalidad española y el propio reglamento de su cámara, el Parlamento catalán aprobó las llamadas Leyes de Desconexión, Leyes de Transitoriedad Jurídica, una Hacienda catalana que recaudara impuestos, potenció lo que denominaba embajadas en el extranjero (activas desde 2012) y una agencia de inteligencia catalana también heredada de Mas.

Parecía llegarse a un punto de no retorno. El ejecutivo de Puigdemont aseguraba que el derecho a decidir de un pueblo en la urnas era algo tan básico que solo un Estado autoritario podía negar; que la Cataluña independiente permanecería en la UE; que su rico tejido empresarial se mantendría intacto; y que sería en cualquier caso una transición pacífica, a la que se le dieron nombres como *Revolución de las Sonrisas* y *Catalan Way*. Por su parte, el Gobierno de España aseguró que no permitiría la votación ilegal del referéndum. Por ello, se llegó con muchas incertidumbres al 1 de octubre de 2017, fecha fijada para el referéndum.

Finalmente, la jornada resultaría un caos. El Gobierno español había tratado de impedir la consulta, intentando intervenir las urnas y las papeletas, así como la apertura de los colegios electorales, todo ello sin éxito. El Gobierno catalán, contando con los medios institucionales a su alcance y con la entusiasta ayuda de la población independentista, logró que se votara. No obstante, más allá de problemas derivados de las limitaciones organizativas, que hicieron posible, por ejemplo, que en algunas circunscripciones hubiera más votos que personas censadas, o que las mismas personas votaran varias veces, las imágenes más impactantes de la jornada fueron las de la policía nacional enfrentándose y agrediendo en varios colegios a quienes se mostraban decididos a votar, desafiando así a los agentes. Lo que era una cuestión interna se convirtió en un acontecimiento de gran eco mundial, en el que las simpatías se situaron del lado de unos ciudadanos golpeados por policías antidisturbios solo por querer depositar su voto en una urna. Internet se llenó de imágenes impactantes y de relatos estremecedores, siendo el más divulgado el de Marta Torrecillas Domènech, una joven humillada y agredida sexualmente por la policía española, cuyo testimonio era ciertamente conmovedor. La agencia Bloomberg, *The Washington Post*, *The New York Times*, *The Guardian*, *The Financial Times*, *Le Monde* y muchos más medios hablaron con sorpresa de violencia injustificada. Si bien era natural que Gobierno de España quisiera impedir una votación ilegal, la desproporción de los medios le restaba toda legitimidad y hacía comprensible que Cataluña quisiera abandonar un Estado que

parecía una democracia normal, pero que mostraba su naturaleza represora. En un informe detallado, la Generalitat cifró en 1.066 el número de pacientes atendidos por los servicios médicos la jornada del 1-0 y en días posteriores. Sin embargo, la victoria moral del independentismo sería breve.

No tardaron en descubrirse que muchas de las imágenes más difundidas en la red sobre violencia policial eran falsas, unas por haberse manipulado y otras por corresponder a años y lugares distintos. Incluso el *viral* caso de Marta Torrecillas resultó ser un bulo reconocido públicamente por la afectada. Sorprendentemente, tampoco hubo imágenes de hospitales llenos de heridos, ni de políticos independentistas visitándoles. A todo ello cabía sumar la confirmación por parte de la UE de que una Cataluña independiente quedaría automáticamente excluida de la organización. Por otra parte, la afirmación independentista de que Cataluña mantendría sus empresas e incluso atraería más inversiones quedó en evidencia, pues las sedes sociales de miles de empresas, entre ellas todas las más importantes, habían abandonado Cataluña entre septiembre y diciembre de 2017. El discurso no violento de los independentistas también quedó en entredicho al saberse que la Generalitat trató de hacerse sin éxito con un arsenal de armas poco antes del 1-0, a la vez que su servicio de inteligencia había estado realizando listas de catalanes no independentistas para controlarlos. Esta información se encontraba en cajas de documentos incómodos que el Gobierno catalán había intentado destruir en una incineradora, siendo intervenidos en el último momento por la policía española. Mientras, salían a la luz el acoso, la presión social, la discriminación, los linchamientos en las redes, el adoctrinamiento en las escuelas y la intimidación de los nacionalistas a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, funcionarios que investigaban posibles delitos del Gobierno autonómico, intelectuales no nacionalistas e incluso contra jueces. Por si fuera poco, una manifestación de un millón de catalanes recorrió Barcelona reivindicando su identidad española y su desacuerdo con los nacionalistas. Todo ello relativizó la credibilidad del relato independentista, y según la prensa internacional iba conociendo más detalles del conflicto, iba tomando una posición más equidistante, cuando no abiertamente crítica con el independentismo (*Le Monde*, 2017, *Charlie Hebdo*, 2017. Sénecat, 2017, *The New York Times*, 2018).

Según los datos de la Generalitat, la participación global del referéndum ascendió al 43,03, imponiéndose el sí fue por el 90,18% de los votos, por un 7,83% del

no y un 1,98% en blanco. Mientras el Gobierno central consideraba que aquellos resultados no tenían validez por ser fruto de una consulta ilegal llevada cabo sin garantías, el ejecutivo de Puigdemont afirmaba que el pueblo catalán había hecho cuánto podía para ejercer su derecho a decidir de forma pacífica y democrática, y que el mandato ciudadano de aquel 90,18% legitimaba la proclamación inmediata de la República, como había prometido. El Gobierno central amenazó entonces con aplicar el artículo 155 de la Constitución, suspendiendo la Autonomía de Cataluña ante la rebelión de sus líderes. Antes de dar ese paso, Rajoy pidió a Puigdemont que aclarase si había declarado la independencia o no, dándole dos semanas de plazo para responder. También se planteó la posibilidad de una salida honrosa para todos mediante unas nuevas elecciones autonómicas. Puigdemont apuró el plazo hasta el último momento, creando una enorme expectación. Finalmente, ante una multitud expectante de nacionalistas en numerosas plazas de toda Cataluña, proclamó la independencia ante el júbilo, las lágrimas y la emoción de aquellos miles, sólo para *suspenderla* inmediatamente, creando un limbo de confusión, frustración y ambigüedad.

Inmediatamente después, se aplicaría el polémico 155 y el Gobierno central se hizo con el control del gobierno catalán. Lo que desde el nacionalismo se percibía como una invasión o colonización, que implicaría masivos episodios de resistencia, se llevó a cabo con pasmosa tranquilidad. El primer paso del Gobierno fue convocar unas nuevas elecciones el 21 de diciembre, con objeto de que el autogobierno regresara cuanto antes. El grueso de los funcionarios aceptaron la situación con naturalidad y si bien se desmontaron estructuras como el Diplocat, toda la prensa independentista, desde los diarios *Ara* y *Punt Avui*, hasta el canal público TV3 continuaron su labor crítica con España sin mayores sobresaltos. Sí que los líderes independentistas rompieron su unidad, y mientras algunos huyeron de España para escapar a una posible prisión preventiva en espera de juicio (caso de Puigdemont), otros mantuvieron su postura y acabaron en la cárcel (caso del líder de ERC Oriol Junqueras), mientras la mayoría cambió su tono y declaró que la declaración de independencia era sólo simbólica y que acataban la Constitución, saliendo así en libertad tras declarar ante los jueces.

Las nuevas elecciones autonómicas de diciembre de 2017 confirmaron tanto la situación de bloqueo como la naturaleza plural de Cataluña, pues si bien los partidos *españolistas* sumaron más votos (52.3%) y el partido ganador fue el antinacionalista Ciudadanos, la Ley electoral catalana dio mayoría de escaños al nacionalismo, de modo

que ambos obtuvieron victorias pírricas. El que el nacionalismo se hallase dividido entre la cada vez más laxa alianza entre ERC y PDCat –heredero del desacreditado CiU- y la CUP, y que los pocos escaños de éstos sean indispensables para formar gobierno, pero exijan a cambio imponer su agenda de compromiso inmediato con la independencia y el anticapitalismo, mantienen una situación de incertidumbre a la hora de redactar estas líneas.

EL AGRAVIO Y LA CODICIA, Y LA PROFECÍA AUTOCUMPLIDA CON EL HITO DEL 1-0

Una vez descritos los hechos detonantes que marcaron el final del autonomismo para que surgiera un creciente movimiento independentista, prestaremos especial atención a los dos factores clave en el estudio de conflictos entre grupos sociales: la codicia y el agravio.

La codicia la encarna sobre todo el nacionalismo conservador de CiU, luego denominado PdCat. Éste desarrolló una estrategia a largo plazo de catalanización de lo que era una sociedad plural, con objeto de garantizarse la continuidad en el poder y, con ello, el control de la economía catalana, que usaron descaradamente para el enriquecimiento de sus líderes. Quiénes tanto decían amar Cataluña y abanderaban el lema “España nos roba”, terminaron siendo quienes realmente estaban desvalijando el erario público. Su ambigüedad respecto a la independencia y su progresiva estrategia de catalanización no causó muchos problemas en Madrid, ya que CiU prestaba apoyo táctico tanto a los gobiernos de izquierda como de derecha, colaborando la gobernabilidad de España y dando a Puyol la reputación de ser el político más astuto del país. Sin embargo, el desprestigio causado por los casos de corrupción de CiU justo cuando el país sufría una enorme crisis económica, la deuda de Cataluña se disparaba y la degradación de servicios sanitarios y educativos era evidente, le causaron un enorme desgaste. Los cada vez más partidarios del nacionalismo optaron entonces por quien aparecía limpio de corrupción y no se mostraba ambiguo, sino decidido respecto a la independencia: ERC. La codicia llevó a CiU a reinventarse como partido independentista ante el miedo a que fuese ERC quien recogiese los frutos de sus décadas de políticas catalanistas, lo que suponría además perder el control de los recursos del Gobierno autonómico de los que tantos beneficios económicos estaba

obteniendo. A eso se añadía el hecho de que una Cataluña independiente permitiría a las élites corruptas de CiU escapar a la justicia española y conservar sus patrimonios ilícitamente logrados.

Sin embargo, mucho más determinante resultaría la cuestión del agravio. La sociedad plural, moderna, abierta, próspera y democrática que emergió en Cataluña tras 1978, ha terminado polarizada y enfrentada en dos bloques. Lecciones como las traumáticas particiones de India, Yugoslavia o Ucrania muestran tanto la belleza de las sociedades plurales, como su fragilidad.

Tanto los partidarios de la independencia como los que prefieren permanecer en España apelan a los mismos valores de democracia, tolerancia, civismo y no violencia. Sin embargo, la fractura social entre ellos no ha hecho más que ensancharse en los últimos años.

Quizá lo que haga tan complejo al problema catalán, más allá de la desafortunada división en dos bloques de similar tamaño, sea que se basa en sentimientos, más que en hechos concretos. En realidad, los hechos solo han sido interpretados por unos y por otros para reforzar sus propios prejuicios. Pese a que Cataluña es una de las regiones más prósperas de España y su nivel de autogobierno es de los más altos del mundo no dejó de estar presente una narrativa, un sentimiento, de que Cataluña no había encontrado acomodo en su relación con el resto de España. La democracia había creado un marco de convivencia de unidad en la diversidad que los catalanes aceptaron masivamente en las urnas. Sin embargo, los decretos de Nueva Planta de 1715 y las dictaduras de Primo de rivera y sobre todo de Franco dejaron un poso en la mentalidad local de que España maltrataba a Cataluña. El nacionalismo catalán se esforzaría por explotar esa idea, sosteniendo que España mantenía un proyecto unificador, autoritario, centralista y españolista que marginaba a Cataluña y que era, de hecho, parte de su naturaleza. Precisamente el estatus económicamente privilegiado de Cataluña demostraba a su juicio que permanecer en España era soportar la rémora, el lastre, de un vecino parásito. La noble idea de convencer a la nación catalana de que se reconociera como tal, como un *solo pueblo*, en unidad, democracia y concordia, suponía indirectamente crear discordia con aquellos catalanes que disfrutaban su identidad plural española y catalana.

Así, mientras en el resto de España la identificación con la patria era muy laxa, los símbolos como la bandera o el himno quedaban reducidos a ámbitos oficiales, y las

narrativas patrióticas españolas como Don Pelayo y la Reconquista, El Cid campeador, los Reyes Católicos o el Imperio americano eran vistas con indiferencia, o incluso habían quedado desacreditadas por la instrumentalización que el franquismo hizo de ellas, en Cataluña se realizaba el camino opuesto. Las banderas independentistas –no la senyera, la oficial- fueron poblando Cataluña, mientras personajes como Vifredo el Velloso, Pau Clarís o Rafael de Casanova, o hitos como la existencia de una corona Catalano-Aragonesa medieval y de unos *Países Catalanes*, 1714 o la represión franquista iban extendiéndose tanto en el sistema educativo como en el imaginario local. En todos los casos, el discurso demostraba la existencia histórica de la nación catalana, su sometimiento forzoso a España, y el peligro que corría de desaparecer ante el centralismo españolista.

En principio, se trataba de discursos culturales e históricos aparentemente inocuos. Sin embargo, muchos catalanes en principio indiferentes, sintieron ser testigos de que todo lo que el nacionalismo había estado sosteniendo acerca de España, parecía hacerse realidad. La Generalitat implicó a toda la sociedad en la petición del nuevo Estatut de 2006, existiendo incluso el *Bus del Estatut*, que recorría Cataluña para concienciar de su importancia. El que en Madrid se recortara el documento aprobado por el Parlament Catalán fue un agravio que pareció confirmar la naturaleza autoritaria de España, y las ya referidas declaraciones de Alfonso Guerra no hicieron sino confirmar esa impresión. Otras declaraciones, como las del ministro de educación Wert, cuando afirmó en 2012 que había que *españolizar* a los niños catalanes, causaron nuevas oleadas de indignación.

Lo mismo sucedería con la negativa del Gobierno central a la celebración de un referéndum de autodeterminación que las encuestas mostraban como deseado por el 80% de la población. En medio, innumerables marchas por la independencia, sobre todo aprovechando el 11 de septiembre, día nacional catalán. Desde 2012, cada vez más, en lugar de representar a todos los catalanes, esa fecha fue convirtiéndose en una multitudinaria fiesta de los independentistas, que orgullosos de su número, capacidad de organización y civismo, continuaban exigiendo al Gobierno Central un referéndum. El que desde Madrid se los ignorase dejaba en evidencia a Rajoy y confirmaba el agravio a que se veía sometido el pueblo catalán. Cuando el gobierno de Puigdemont decidió celebrar la consulta unilateralmente, la prohibición del Gobierno central hizo que muchos catalanes lo sintieran como otra afrenta, y aprovechando el enorme tejido de

organizaciones de la sociedad civil catalanas, miles de ciudadanos, incluyendo a niños y ancianos, colaboraran activamente en la organización clandestina del referéndum. Se sentían así protagonistas de su historia y entusiastas defensores de la democracia y la paz frente al carácter represivo de España. Los cánticos de “A por ellos” con que la multitud despidió al destacamento de policía de Huelva destinado a Cataluña con motivo del referéndum no hizo sino reafirmarles en su idea. Luego vendría la violencia policial vivida durante la consulta el 1 de octubre, en la que muchos vieron con horror cómo las tesis nacionalistas se confirmaban, apareciendo España casi como una potencia ocupante y represora.

Así, los hitos históricos fueron perdiendo fuerza, pues ya no eran necesarios. El presente mostraba ya suficientes hechos en lo que parecía una profecía autocumplida de enfrentamiento ente Cataluña y España. En realidad, gran parte de su origen estaba precisamente en haberse creado un clima de enfrentamiento discursivo, político y cultural, que resultó ser auténtica gasolina en el contexto de una sociedad plural crecientemente enfrentada. Era un mecanismo muy similar al que emplearon las repúblicas independentistas en Yugoslavia a lo largo de la década de los 80, sembrando una semilla de desconfianza entre las comunidades de aquella sociedad plural, y que también germinaría trágicamente en profecía autocumplida los 90. (RUIZ JIMÉNEZ, 2017, p. 41-64)

Al otro lado de esos agraviados nacionalistas de nobles y honestos propósitos, se encuentra aproximadamente la otra mitad de los catalanes, hasta ahora mayoritaria en las urnas, que se siente española y que también se siente abusada y agraviada, en su caso por un nacionalismo que les excluye al pretender representar en exclusiva a todo el pueblo de Cataluña. Se sienten señalados por un léxico en el que se les describe peyorativamente como sucursalistas, anticatalanes, españolistas o traidores. No obstante, los adjetivos que se les dedican más a menudo son *botifler* y *facha*. El secesionismo ha rescatado el término *botifler*, originalmente solo referido a quienes apoyaron a los Borbones en 1714. Se usa ahora como insulto contra políticos catalanes como Miquel Iceta (PSOE), Xavier García Albiol (PP), Paco Frutos (ICV-EUiA) e incluso Josep Antoni Duran Lleida, durante 12 años portavoz de CiU en el Congreso. También se ha utilizado profusamente contra intelectuales y artistas locales no independentistas tan reconocidos como Joan Marsé, Joan Manuel Serrat, Albert Boadella, Felix de Azúa o Eduardo Mendoza. En realidad, son los mismos a los que se

aplica el acrónimo de fascista *facha*. Este término se aplica despectivamente a quien se opone a la independencia. Los catalanes que se sienten españoles denuncian que ese léxico persigue dar la impresión que el pueblo catalán lo componen sólo los independentistas. Quedan así excluidos los votantes de Ciudadanos, PSC y PP, por ejemplo. Y es que nada menos que la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, afirmó en público que había que tener muy claro que Ciudadanos (ahora el partido más votado en Cataluña tanto en las elecciones generales como en las autonómicas) y PP de Cataluña eran *el enemigo* y el resto, *el pueblo de Cataluña*.

La mitad de los catalanes critican al independentismo porque no quieren ser considerados extranjeros en su propio país por sentirse también españoles. También denuncian que los políticos no pueden situarse por encima de la ley y crear las suyas propias en paralelo y sin un apoyo mayoritario de la población. De hecho, les parece intolerable que antes del referéndum del 1-0 ya se hubieran destinado tantos millones de euros a crear unas estructuras de Estado paralelas, anticipándose al resultado. También critican que se destinen tantos recursos públicos a fabricar patriotas en el sistema educativo público o financiando organizaciones independentistas de todo tipo. Estos catalanes se sienten intimidados ante manifestaciones callejeras promocionadas por el Gobierno autonómico y disciplinadas hasta en la forma de vestir. Rechazan el uso de niños en actos políticos, el que lemas independentistas se exhiban en colegios de educación primaria y secundaria, y el que la televisión pública catalana difunda consignas independentistas en programas infantiles. No les gustan las antorchas, ni los paros *de país*, ni las huelgas *de país*, ni todas esas actividades *de país* que no comparten. Tampoco les gustan los cortes de carreteras y los episodios de vandalismo urbano protagonizados por los autodenominados Comités de Defensa de la República. Y les impacta que los diputados canten el himno en pie en el hemiciclo, práctica nada habitual en Cataluña, y que los medios públicos observen, escriban y señalen a quienes no lo hacen.

Es la mitad de catalanes que rechazan la tesis independentista de que están colonizados, ignorados en su identidad cultural, invadidos y expoliados. Más bien, sienten que la identidad cultural ignorada y despreciada es la de los catalanes que ni siquiera pueden escolarizarse en su lengua materna si ésta es el español; que consideran la explotación económica de Cataluña a manos de España un sinsentido, pues más de doscientos cargos de la Generalitat cobran más que el presidente de España, incluido

Puigdemont, que cobraba el doble. De hecho, señalan que Cataluña es una de las regiones más ricas de Europa lo que demostraría la poca habilidad de España como potencia explotadora y colonizadora. También hacen notar lo ambiguo del *problema catalán* y sus soluciones: el encaje, el sentirse querido, la comodidad, la desafección o la necesidad de hacer España atractiva. Sienten que el nacionalismo independentista es una ideología excluyente y radicalmente antiigualitaria, que contrasta arrogantemente la virtud, el civismo y los valores positivos catalanes con el atraso, la torpeza, la incultura y el autoritarismo característicos de España. El silencio, invisibilidad y la inacción de esta mitad de Cataluña se rompieron abruptamente cuando una pequeña organización no independentista, Sociedad Civil catalana, decidió realizar una serie de manifestaciones por la unidad de España que, sin el apoyo que las televisiones, radios y periódicos prestan a las diadas reunieron a un millón de catalanes cada vez, enterrando el discurso independentista de que había *un solo pueblo*, de que los independentistas hablaban en nombre de la nación catalana y de lo errado de la afirmación independentista de que “las calles siempre serán nuestras”. En definitiva, ellos también sienten que la razón, la democracia y los valores cívicos están de su lado.

Por todo ello, lo que era una sociedad plural es cada día más una sociedad fracturada y enfrentada, no sólo entre partidos políticos, sino entre familiares, compañeros de trabajo y amigos. El hecho de llenar las calles para mostrar que se representa *la voluntad del pueblo* es un peligroso sustituto de la política y el respecto a las leyes y a los resultados electorales, como bien se ha demostrado en Venezuela en los últimos quince años. La codicia de unos y el sentimiento de agravio que se ha extendido son circunstancias muy peligrosas, aún más en un contexto internacional donde los populismos nacionalistas iliberales han ido ganando popularidad e incluso llegado al gobierno en países como Brasil, Polonia, Hungría, Bulgaria, Serbia y Austria, mientras crecen cada vez más en otros como Francia, Italia, Holanda o Gran Bretaña.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUIRRE DE CÁRCER Alberto. Rebelión autonómica por el trato de favor a Cataluña, **La Verdad**, Murcia, 8 de febrero de 2011.

- ALBAREDA SALVADÓ, Joaquim. **La Guerra de Sucesión de España (1700-1714)**. Barcelona: Crítica. 2010.
- EDITORIAL, Idiotez o muerte, los Bajo el titular '**Les catalans plus cons que les corses, Charlie Hebdo**, París, 11 de octubre de 2017.
- DE RIQUER, Borja. **Alfonso XIII y Cambó. La monarquía y el catalanismo político**. Barcelona: RBA. 2013.
- ELLIOT, John H. **La rebelión de los catalanes. Un estudio sobre la decadencia de España (1598-1640)** Madrid: Siglo XXI. 1982.
- GARCÍA CÁRCEL, Ricardo. **El sueño de la nación indomable**. Temas de Hoy: Madrid. 2007.
- GENERALITAT DE CATALUNYA. La estrategia de la recatalanización, **El Periódico de Cataluña**, Barcelona, 18 de octubre de 1990
https://static1.squarespace.com/static/5a5a3b4dbff2004f7c3d8a8b/t/5a6d11b70d929714757fdca8/1517097405231/TT_Programa_2000_CAS.pdf
- GENERALITAT DE CATALUNYA. Informe “Crònica d’una ofensiva premeditada”, 2015. http://estaticos.elmundo.es/documentos/2015/06/30/informe_catalunya.pdf
- EDITORIAL. En Catalogne, le politique du pire, **Le Monde**. París, 23 octobre 2017.
- EDITORIAL. The Catalonia Dispute Ensnarers Germany. **The New York Times**, 28 de marzo de 2018.
- MENDOZA, Eduardo **¿Qué está pasando en Cataluña?** Barcelona: Seix Barral, 2017.
- RODRÍGUEZ, Marta. Carod Rovira: "No soy ningún soñador", **ADN**, 28 de agosto de 2008.
- RUIZ JIMÉNEZ, José Ángel. **Y llegó la barbarie**: Nacionalismo y juegos de poder en la destrucción de Yugoslavia. Barcelona: Crítica. 2017.
- SÉNÉCAT, Adrien. Violences policières en Catalogne: attention aux images trompeuses. **Le Monde**, 2 de octubre de 2017.
- TORRES, Xavier. **La Guerra dels Segadors**. Lérida-Vic: Pagès Editors-Eumo Editorial. 2006.
- VIDAL FOCH, Javier. **¿Cataluña independiente?** Barcelona: Catarata. 2013.

RECEBIDO EM: 24/06/2019

PARECER DADO EM: 21/10/2019